



RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA  
CALLE 5 No. 6-29 PISO 2 OFICINA 207 CENTRO COMERCIAL LA QUINTA  
ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA

**25899-33-33-001 - 2024 - 00025 -00**

**TUTELA**

CUADERNO PRINCIPAL   No.01

**DEMANDANTE(S) CAMILO ANDRES HERNANDEZ  
MUÑOZ**

e-mail:   fabihumcg@gmail.com; camanhermu@gmail.com

Apoderado:

e-mail:

**DEMANDADO(S) COMISION ESCRUTADORA  
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA -  
REGISTRADURIA NACIONAL DEL**

e-mail:

**JUEZ. LUIS ANDERSON BARRIOS DIAZ**

FECHA RADICACION: 07 de febrero de 2024

ELEGIR Y SER ELEGIDO - ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

**2024-000025**

RV: Generación de Tutela en línea No 1890030

Recepción Tutelas Centro Servicios Judiciales - Cundinamarca - Zipaquirá  
<tutelascszip@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 7/02/2024 10:01 AM

Para:Juzgado 01 Administrativo Oral - Cundinamarca - Zipaquirá <j01adminzip@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
CC:fabihumcg@gmail.com <fabihumcg@gmail.com>;camanhermu@gmail.com <camanhermu@gmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (85 KB)  
ACTA A J01ADMIN 07022024.pdf;

Señor  
JUEZ CONSTITUCIONAL  
Zipaquirá Cundinamarca

Cordial saludo.

Remito acción de tutela que correspondió por reparto, la cual relaciono a continuación:

ACCIONANTES: CAMILO ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ

ACCIONADOS: COMISION ESCRUTADORA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA/REGISTRADURIA NACIONAL DLL  
ESTADO CIVIL/CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

FECHA RECIBO: 06 DE FEBRERO DE 2024      HORA: 12:13 PM TUTELA EN LINEA No 1890030

CUADERNOS: ARCHIVOS ADJUNTOS    FOLIOS: ARCHIVO TUTELA EN EL CORREO PRECEDENTE

SE REPARTE AL JUZGADO: PRIMERO ADMINISTRATIVO

QUEDA EN PUERTAS EL JUZGADO: PRIMERO PENAL CIRCUITO

OBSERVACIONES: EL REPARTO SE REALIZA DE ESTA MANERA POR ESPECIALIDAD ATENDIENDO QUE EL  
DIA 07 DE FEBRERO SE HIZO REPARTO AL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO

ESTE REPARTO QUEDA COMO ABONO

OBSERVACIONES: FAVOR ACUSAR RECIBIDO.

En atención a la circular interna No. 05 del 27 agosto de 2020, emitida por esta coordinación. Se insta a: **LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.** Que de conformidad al Decreto 2591 DE 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo de la Constitución Política, y de conformidad a lo preceptuado en su artículo 37 “... El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio...”.

**En el caso de haber interpuesto ante otra autoridad competente la misma acción constitucional, debe informarlo expresamente en el escrito de la presentación de la tutela, o en el mensaje de envío, so pena de las previsiones descritas en el artículo 38 de la referida norma.**

Atentamente.

JUAN MANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ  
Profesional Universitario G14  
Secretario Centro de Servicios Judiciales de Zipaquirá

**De:** Tutela En Linea 02 <tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co>  
**Enviado:** martes, 6 de febrero de 2024 12:13  
**Para:** Recepción Tutelas Centro Servicios Judiciales - Cundinamarca - Zipaquirá

<tutelascszip@cendoj.ramajudicial.gov.co>; fabihumcg@gmail.com <fabihumcg@gmail.com>

**Asunto:** Generación de Tutela en línea No 1890030

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Buen día,

**Oficina Judicial / Oficina de Reparto**

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 1890030

Lugar donde se interpone la tutela.

Departamento: CUNDINAMARCA.

Ciudad: ZIPAQUIRA

Lugar donde se vulneraron los derechos.

Departamento: CUNDINAMARCA.

Ciudad: ZIPAQUIRA

Accionante: CAMILO ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ Identificado con documento: 1075652905

Correo Electrónico Accionante : fabihumcg@gmail.com

Teléfono del accionante : 3182932882

Tipo de discapacidad : NO APLICA

Accionado/s:

Persona Jurídico: REGISTRADURIA DE ZIPAQUIRA Y RAMA JUDICIAL- Nit: ,

Correo Electrónico:

Dirección:

Teléfono:

Medida Provisional: NO

Derechos:

ELEGIR Y SER ELEGIDO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:

[Archivo](#)

**Cordialmente,**

**Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:**

**Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no acepta respuestas.**

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Honorables

JUECES CONSTITUCIONALES (REPARTO)

REF: ACCION DE TUTELA POR VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA, DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO Y EL DERECHO AL ACCESO DE JUSTICIA.

ACCIONANTE: CAMILO ANDRÉS HERNÁNDEZ MUÑOZ.

ACCIONADO: COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y RAMA JUDICIAL (JUECES DEL CIRCUITO DE BOGOTA O QUIEN SEA EL RESPOONSABLE DE LA VULNERACION DEL DERECHO) .

Camilo Andrés Hernández Muñoz, mayor de edad, vecino y residente en el municipio de Zipaquirá, portador de la cédula de ciudadanía No. 1075652905 expedida en Zipaquirá, con todo respeto manifiesto a usted que en ejercicio del derecho de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, Decreto. 1382 de 2000 y el Decreto 1983 de 2017 (Que hace competente a éste despacho) por este escrito formulo acción de tutela contra la Comisión Escrutadora Municipal de Zipaquirá, La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral en amparo a mis derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, a elegir y ser elegido, los cuales fueron conculcados dentro del proceso de escrutinios de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre de 2023 y que se llevaron a cabo en el aula múltiple de la IEM Liceo Integrado de Zipaquirá, toda vez que de manera inexplicable se eliminaron los votos a la JAL de la comuna 4 por la coalición “Pacto Histórico Colombia Puede”.

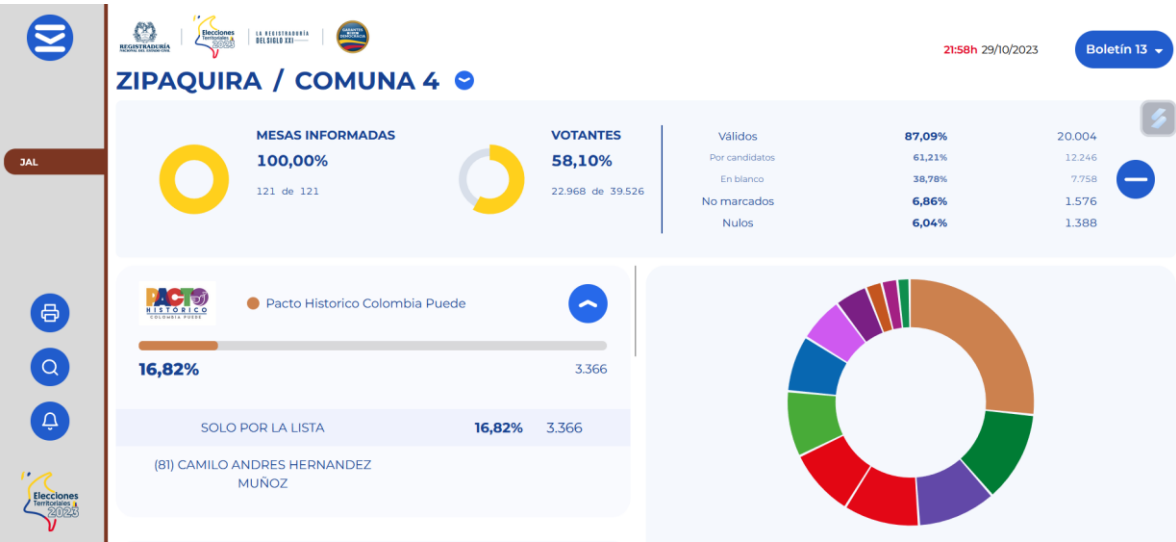
HECHOS

1. ELECCIONES Y PRECONTEO

El día 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales de Alcaldía, Gobernación, Asamblea, Concejo y JAL.

Las votaciones para la Junta Administradora Local de la Comuna 4 de Zipaquirá, según el preconteo, se evidencian en la siguiente imagen:

Hago énfasis en los 20,004 votos válidos, 1.576 votos no marcados y los 3.366 votos de la coalición “Pacto Histórico Colombia Puede” de la cual yo era el único candidato.




2. ESCRUTINIO

Posterior a las votaciones, se llevaron a cabo los escrutinios auxiliares y municipal, instancias en las cuales se revisaría todo aquello a que hubiera lugar. Finalizado el escrutinio municipal de Zipaquirá, el 4 de noviembre se publican los formularios E24 donde se publica el total de votación por partido y E26 donde se hace publica la DECLARATORIA DE ELECCIÓN

3. Formulario E24

En este formulario que sale de la Comisión Escrutadora Municipal, firmado por Luis Angel Martínez y Ricardo José Cadavid, miembros, y Luis Guillermo Acuña, secretario; se afirma que la votación de la coalición “Pacto Histórico Colombia Puede” es de 0 votos. De esta manera, a mi consideración se vulnera el derecho a elegir y ser elegido, a 3366 personas que ejercieron su derecho al voto y lo hicieron por esta coalición, pues no aparecen sus votos. Además, el número de votos No Marcados pasa de 1576 en el preconteo a 5193 en el escrutinio.



REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
ELECCIONES AUTORAIDADES TERRITORIALES-29 DE OCTUBRE DE 2023  
CUADRO DE RESULTADOS DEL ESCRUTINIO  
JAL

E-24 JAL

HOJA N° 1 DE 3

ESCRUTINIO

AUXILIAR ☐ MUNICIPAL/DISTRITAL ☒ GENERAL ☐

PP	CANDIDATOS	ZONA: 02	Total
0001	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	237	237
	081 DANIEL MAURICIO TORRES RUBIANO	714	714
	082 YOLANDA VASQUEZ ROJAS	279	279
	TOTAL	1230	1230
8425	PACTO HISTORICO COLOMBIA PUEDE	0	0
	TOTAL	0	0
0002	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	211	211
	081 SANTIAGO RAMIREZ RUBIANO	701	701
	TOTAL	912	912
0031	INDEPENDIENTES	112	112
	081 MILTON DAVID DUARTE PINZON	401	401
	TOTAL	513	513
0004	PARTIDO ALIANZA VERDE	399	399
	081 ALEJANDRO NOVAL PINZON	1115	1115
	TOTAL	1514	1514
0019	PARTIDO NUEVO LIBERALISMO	312	312
	081 EDNA MILENA GOMEZ CASTRO	396	396
	082 NELSON DANILO CRISTIANCHO PARRA	191	191
	083 JUAN MANUEL MARTIN PINTO	98	98
	084 LUISA FERNANDA PRADA GARZON	85	85
	085 ADRIANA MARIA SALAZAR RODRIGUEZ	206	206
	TOTAL	1288	1288
0008	PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO	187	187
	081 LINA VICTORIA BARRICA MARTINEZ	585	585
	082 JERRY MARCELA COGUA LATON	316	316
	TOTAL	1089	1089

DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

ZIPAQUIRÁ

COMUNA:


COMUNA 4

MESAS A ESCRUTAR: 121


MESAS ESCRUTADAS: 121

MESAS FALTANTES: 0

ESCRUTINIO: 100,00%




LUIS ANGEL MARTINEZ LEAL




RICARDO JOSE CADAVID BENITEZ

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA



LUIS GUILLERMO ACUÑA BARRAGAN

SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

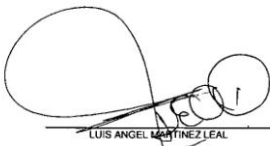



04/11/2023 7:54:32 p. m.  
E24\_JAL\_R\_15\_340\_XXXX\_04\_XX\_M\_2381\_F\_35  
KV 2.0.5.1.7



ESCRUTINIO			
AUXILIAR	<input type="checkbox"/>	MUNICIPAL/DISTRITAL	<input checked="" type="checkbox"/>
PP	CANDIDATOS	ZONA: 02	Total
	VOTOS NO MARCADOS	5193	5193
	TOTAL	5193	5193

DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	COMUNA:
CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRA	COMUNA 4
MESAS A ESCRUTAR: 121	MESAS ESCRUTADAS: 121	MESAS FALTANTES: 0
ESCRUTINIO: 100,00%		

  
LUIS ANGEL MARTINEZ LEAL  


  
RICARDO JOSE CADAVID BENITEZ  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

  
LUIS GUILLERMO ACUNA BARRAGAN  
SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

04/11/2023 7:54:32 p. m.  
E24\_JAL\_2\_15\_340\_XXX\_04\_XX\_M\_2061\_F\_35  
KV 2.0.5.5.1.7

#### 4. Formulario E26

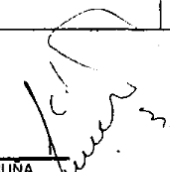
En este formulario se toma la votación que se plasmó en el formulario E24 y a partir de allí se reparten las curules a obtener y se realiza la declaratoria de elección.

En este formulario, nuevamente aparece la coalición “Pacto Histórico Colombia Puede” sin votación, por lo cual no supera el umbral y no entra a disputar ninguna curul.

#### RESUMEN DE LA VOTACIÓN

CODIGO	PARTIDO/MOVIMIENTO POLÍTICO	VOTOS EN LETRAS	TOTAL
0001	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	MIL DOSCIENTOS TREINTA	1.230
8425	PACTO HISTORICO COLOMBIA PUEDE	CERO	0
0002	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	NOVECIENTOS DOCE	912
0031	INDEPENDIENTES	QUINIENTOS TRECE	513
0004	PARTIDO ALIANZA VERDE	MIL QUINIENTOS CATORCE	1.514
0019	PARTIDO NUEVO LIBERALISMO	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO	1.288
0008	PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U	MIL OCHENTA Y OCHO	1.088
0036	PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO	CUARENTA Y SIETE	47
0012	MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	MIL OCHENTA Y CUATRO	1.084

  
LUIS ANGEL MARTINEZ LEAL  
  
RICARDO JOSE CADAVID BENITEZ  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

  
LUIS GUILLERMO ACUNA BARRAGAN  
SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

Si la votación se hubiera mantenido como estaba en el preconteo la coalición “Pacto Histórico Colombia Puede” sería la única lista que pasaría el umbral y tendría derecho a su respectiva curul. Ahora que, según los formularios E24 y E26 esta coalición aparece con 0 votos, ninguna lista superaría el umbral y entonces todas las listas pueden disputar una curul según lo establecido en el artículo 21 del acto legislativo 02 de 2015

CÁLCULO DEL UMBRAL

En cumplimiento al artículo 263 de la Constitución Nacional (Modificado mediante el Artículo 11 del Acto Legislativo N° 01 de 2009), el UMBRAL sera el CINCUENTA por ciento(50%) del cuociente Electoral. De esta forma el resultado es el siguiente:

TOTAL VOTOS VALIDOS	16.829
NUMERO DE CURULES	5
CUOCIENTE ELECTORAL	3.365
UMBRAL	1.682

PARTIDOS QUE SUPERAN EL UMBRAL

CÓDIGO	PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO	VOTOS
--------	-------------------------------	-------

CIFRA REPARTIDORA

En cumplimiento del artículo 263 de la Constitución Nacional (Acto Legislativo 01 de 2003 Artículo 13 y modificado por el Artículo 21 del Acto Legislativo 02 del 2015) la adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación se hará por el sistema de cifra repartidora. Esta resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el número de votos obtenidos por cada lista, ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer. El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces este contenida la cifra repartidora en el total de sus votos

LA CIFRA REPARTIDORA ES:	1084.0
--------------------------	--------

CALCULO DE CURULES POR PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO

CÓDIGO	PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO	VOTACIÓN / CIFRA R.			
		VOTOS	ENTERO	DECIMAL	POSIBLE(S) CURUL(ES)
0004	PARTIDO ALIANZA VERDE	1.514	1	39867	1
0019	PARTIDO NUEVO LIBERALISMO	1.288	1	18819	1
0001	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	1.230	1	13468	1
0008	PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U	1.088	1	369	1
0012	MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	1.084	1	0	1
0002	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO	912	0	84132	0
0024	PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO	726	0	66974	0
0031	INDEPENDIENTES	513	0	47324	0
0028	AGRUPACIÓN POLÍTICA EN MARCHA	229	0	21125	0
0016	MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	161	0	14852	0
0036	PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO	47	0	4335	0
	TOTAL CURULES				5

Declarando la elección de estos candidatos

DEPARTAMENTO 15-CUNDINAMARCA	MUNICIPIO 340-ZIPAKUIRA	COMUNA 04-COMUNA 4
------------------------------	-------------------------	--------------------

DECLARATORIA DE ELECCIÓN

En consecuencia se declara(n) electo(s) como EDILES del departamento de CUNDINAMARCA, municipio de ZIPAKUIRA, comuna COMUNA 4 para el Periodo Constitucional 2024-2027 al(los) siguiente(s) candidato(s):

PARTIDO Y/O MOVIMIENTO POLÍTICO	CANDIDATO	CÉDULA
0001-PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	TORRES RUBIANO DANIEL MAURICIO	1075688677
0004-PARTIDO ALIANZA VERDE	NOVAL PINZON ALEJANDRO	1000719767
0008-PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U	GARNICA MARTINEZ LUNA VICTORIA	1075652881
0012-MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	PINEDA RAMIREZ LILIANA MARIA	52329499
0019-PARTIDO NUEVO LIBERALISMO	GOMEZ CASTRO EDNA MILENA	52336397

El día domingo 29 de octubre yo era edil electo en el preconteo, sin ninguna explicación en el escrutinio municipal la votación de la coalición “Pacto Histórico Colombia Puede” pasó de ser 3366 a ser de 0 votos, quitándome así la posibilidad de ser edil y representar a mis votantes y a mi comuna para darle paso a 5 curules de otros movimientos.

Camilo Andrés Hernández Muñoz considero en esta situación se vulnera el derecho a mis electores y a mí, a elegir y ser elegido, respectivamente.

Considero que no existe otro mecanismo judicial que logre restituir mi derecho a ser elegido y el derecho de los mas de 3000 ciudadanos que creyeron en esta apuesta, no se configura en ninguna causal de nulidad electoral, debido a que fue un error de procedimiento el cual desconoció el mandato de los votantes de la comuna 4 de Zipaquirá.

Posteriormente, se me vuelve a revictimizar con una vulneración del Derecho al acceso a la justicia debido a que el 16 de noviembre de 2023 radique acción de tutela mediante la plataforma y fue remitido el siguiente mensaje de radicación:



Posteriormente, llega este correo diciendo que se remitió por competencia a los juzgados administrativos del circuito judicial de Zipaquirá, como se observa a continuación:

URGENTE - REMITE POR  
COMPETENCIA a los Juzgados  
Administrativos del Circuito  
Judicial de Zipaquirá, (Reparto) - ☆  
ACCIÓN DE TUTELA No. 2023 -  
00405 Recibidos

Juzgado 25... Hace 4 días

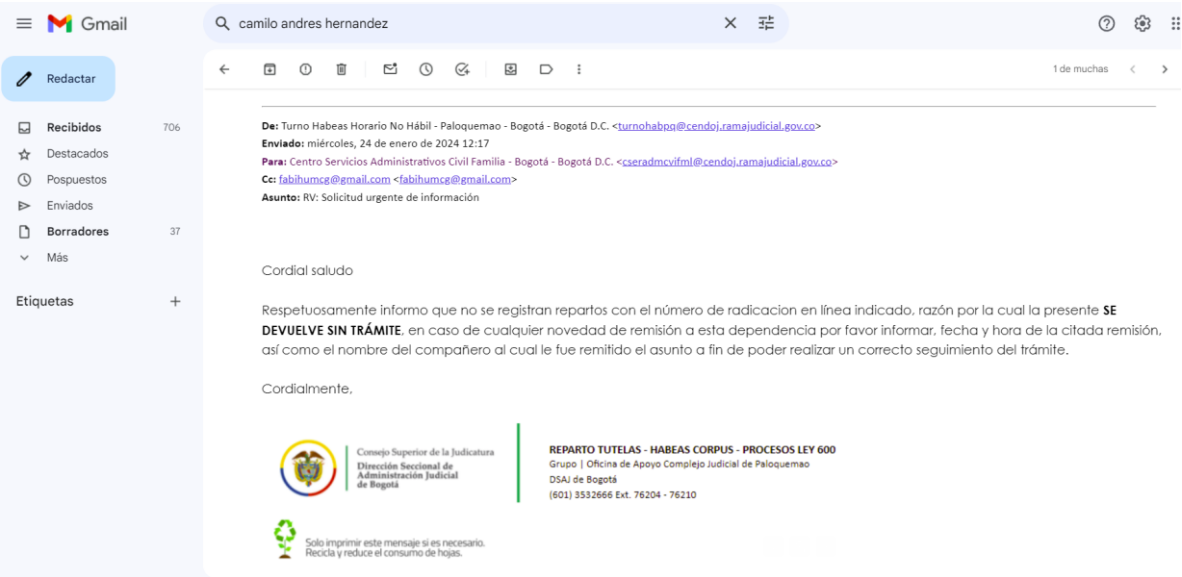
para Oficina, Juzgado... ▾

**JUZGADO VEINTICINCO**  
**ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL**  
**CIRCUITO DE BOGOTA - SECCION**  
**SEGUNDA**  
Carrera 57 N.º 43 – 91 Piso Quinto, Nueva  
Sede Judicial Aydee Anzola Linares

Bogotá D.C, 17 de NOVIEMBRE de 2023

Señores:

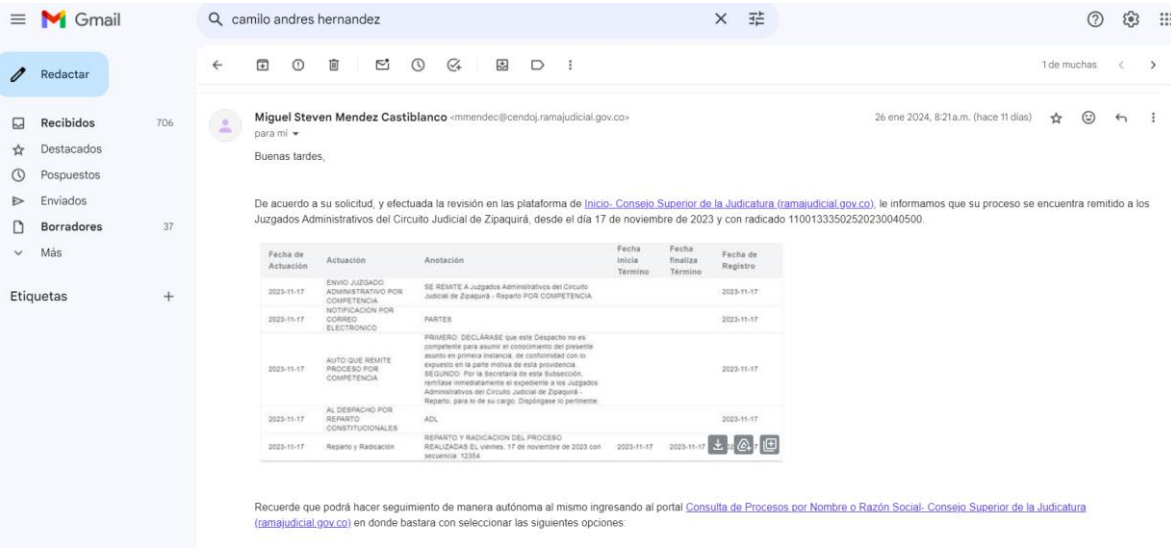
**Juzgados Administrativos del Circuito Judicial  
de Zipaquirá (Reparto).**



Posteriormente, se remite al Tribunal Superior de Cundinamarca, el cual lo remite de nuevo a los Jueces del Circuito de Bogotá en donde ya se pierde el rastro de la acción constitucional, (se adjunta auto enviado por el Tribunal).

De acuerdo, a las diferentes remisiones por competencia, espere el tramite y que pasara la vacancia judicial y envíe de nuevo correos solicitando información de la acción de tutela hasta que el día 26 de enero de 2023 me envían la siguiente imagen mediante correo ellectronico;

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
2023-11-17	ENVIO JUZGADO ADMINISTRATIVO POR COMPETENCIA	SE REMITE A Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Zipaquirá - Reparto POR COMPETENCIA			2023-11-17
2023-11-17	NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO	PARTES			2023-11-17
2023-11-17	AUTO QUE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA	PRIMERO: DECLÁRASE que este Despacho no es competente para asumir el conocimiento del presente asunto en primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Por la Secretaría de esta Subsección, remítase inmediatamente el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Zipaquirá - Reparto, para lo de su cargo. Dispóngase lo pertinente.			2023-11-17
2023-11-17	AL DESPACHO POR REPARTO CONSTITUCIONALES	ADL			2023-11-17
2023-11-17	Reparto y Radicación	REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL viernes, 17 de noviembre de 2023 con secuencia: 12354	2023-11-17	2023-11-17	2023-11-17



Evidenciando que efectivamente se vulnera el derecho al acceso a la justicia y adicionalmente los despachos responsables cometen conductas con responsabilidad disciplinaria, y incrementando la vulneración de mis derechos.

## DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS

El derecho al acceso a la justicia es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia. Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley.

En cuanto a la revictimización, la Corte Constitucional ha señalado que se presenta cuando la víctima de un delito o de una violación a sus derechos fundamentales es sometida a un nuevo proceso judicial o administrativo que le implica revivir los hechos traumáticos que ya había superado.

En relación con la tutela, la Corte Constitucional ha interpretado que el derecho de acceso a la administración de justicia no se limita a garantizarle a los habitantes del territorio la posibilidad de solicitar ante los jueces competentes la protección o el restablecimiento de sus derechos sino que implica, además que el acceso sea efectivo. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos.

Estimo que la actitud de la Comisión Escrutadora Municipal de Zipaquirá, constituye una manifiesta violación a mi derecho fundamental al debido proceso, como también al derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 29 y 229 de la Constitución Política, respectivamente, que ordena:

*Artículo 29: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".*

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

*En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.*

*Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o el de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a presentar pruebas y a controvertir las que se aleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.*

*Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".*

*Artículo 229: Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La Ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.*

La doctrina define el debido proceso como todo el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguren a lo largo del mismo una recta y cumplida Administración de Justicia, al igual que la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales proferidas conforme a derecho.

El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás funciones del Estado, la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico, sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan positiva y negativamente a los servidores públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté laboralmente prevista y únicamente puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia.

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material.

Dentro de los principios fundamentales del debido proceso recogidos expresamente en la Constitución Nacional se encuentra el de que toda persona tiene derecho a promover la actividad judicial para solicitar la protección de sus derechos e intereses legítimos.

Es por lo anterior que el artículo 229 de la Constitución dispone:

*"Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de Justicia".*

La Constitución impone los principios del debido proceso no solo a las actuaciones de la Rama Judicial, sino a todas las realizadas por las autoridades para el cumplimiento de los cometidos estatales, la prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Este derecho es de aplicación inmediata conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Carta, vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal que pretende dentro de sus fines proteger a los individuos en su dignidad, personalidad y desarrollo frente a eventuales arbitrariedades amparadas en el ejercicio del poder.

El actuar de la Comisión Escrutadora Municipal de Zipaquirá, vulneró el derecho constitucional, amparado al Debido Proceso, la garantía procesal de la seguridad jurídica y el acceso a la justicia en el más amplio de los sentidos preceptuados en los artículos 29, 95 y 229 de la Carta Magna.

Como es sabido, el debido proceso es un derecho constitucional fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual lo hace extensivo "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, "con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incurso en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción".

En este sentido, el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnimoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como propósito específico "la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P).

De manera general, hacen parte de las garantías del debido proceso: a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad

ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.”

### **Sentencia C-980/10**

“El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es procedente contra toda actuación de una autoridad pública<sup>[21]</sup> con la que se perturbe un derecho fundamental. Dicha norma no establece distinción alguna sobre la naturaleza de la autoridad susceptible de tutela, por lo que, de acuerdo con este mandato, es posible interponer esta acción incluso contra la providencia de un juez, autoridad pública cuyas decisiones pueden ser sometidas al control estricto de constitucionalidad en eventos en los cuales se vislumbre la amenaza o vulneración de derechos de esta entidad.

Inicialmente, el Decreto 2591 de 1991, expedido por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 5º transitorio de la Constitución nacional, reglamentó la acción de tutela, y en sus artículos 11, 12 y 40 trataba el tema de la interposición de esta acción contra decisiones judiciales. Sin embargo, dichos artículos fueron objeto de control abstracto de constitucionalidad y una consecuente declaratoria de inexequibilidad mediante sentencia C-543 de 1992, en la que la Corte Constitucional definió que esos artículos eran contrarios a los principios de cosa juzgada, autonomía funcional del juez y a la seguridad jurídica.

No obstante, en un aparte de esa sentencia se planteó una excepción a la intangibilidad de las decisiones judiciales que, por su importancia, será presentada en extenso:

De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. (Subrayas por fuera del texto original)

De acuerdo con este punto, la tutela no procedería contra una decisión judicial propiamente dicha, sino contra la actuación de un operador judicial que encarnara el desconocimiento de derechos fundamentales o la creación de un perjuicio irremediable. Lo esencial es que, a través de este fallo se sentó la doctrina de las vías de hecho, que permitiría en adelante justificar la procedencia de una acción de tutela en contra de omisiones o acciones provenientes de jueces con las que se ocasionara la violación de derechos fundamentales” Referencia: expediente T-3106156. Acción de Tutela instaurada por Jairo Alfonso Manrique Bocanegra contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil - Familia. Magistrado Ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

## Sentencia C-284/15

“6.2.2. En la sentencia C-836 de 2001 se hizo una amplia referencia a la significación de la seguridad jurídica y a su importancia específica para la administración de justicia. Sostuvo en aquel entonces:

“El derecho, como instrumento de ordenación social, pretende regular ciertos aspectos de las relaciones humanas, estabilizándolos. Cualquier comunidad política que pretenda organizarse como tal a partir del derecho requiere para tal fin, que sus miembros tengan cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad. En una sociedad altamente compleja como lo es el Estado contemporáneo, caracterizada por un aumento en la intensidad y en la variedad de la actividad social, el nivel de certeza requerido respecto de la protección social de determinadas conductas es mayor. Nuestra forma de organización político jurídica protege a todas las personas, imponiendo a las autoridades la obligación de garantizar la efectividad de los derechos y deberes (C.P. artículo 2º), a través del derecho, como sistema estable de ordenación social. Sin embargo, en un Estado contemporáneo, establecido como social de derecho, en el cual la labor de creación del derecho es compartida, la estabilidad de la ley en el territorio del Estado y en el tiempo no son garantías jurídicas suficientes. En nuestro Estado actual, es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica con la que puedan contar los administrados y que cobije también a la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Sólo así se puede **asegurar** la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2º)

La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el principio de la seguridad jurídica. (...)

La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente. Esta certeza hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley. La falta de seguridad jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al desorden social, porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus derechos y de sus obligaciones. Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles interpretaciones de la ley. (...)

En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación. Esta garantía sólo adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina *venire contra factum proprium non valet*. En efecto, si esta máxima se predica de la actividad del Estado en general, y se extiende también a las acciones de los particulares, donde –en principio– la autonomía privada prima sobre el deber de coherencia, no existe un principio de razón suficiente por el cual un comportamiento semejante no sea exigible también a la actividad judicial. (...) El derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado (...) como administrador de justicia. (...) Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme.”

Esta postura permite identificar los intereses constitucionales comprometidos con la salvaguarda de la seguridad jurídica en la actividad judicial: su garantía permite a los ciudadanos prever las reglas que les serán aplicadas. La estabilidad en la interpretación y aplicación del derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos (art. 2) dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite. Al fundamento de la seguridad jurídica también concurre el principio de la buena fe que impone a las autoridades del Estado, el deber de actuar de manera coherente y de abstenerse de defraudar la confianza que depositan en ellas los ciudadanos (art. 83). También el reconocimiento de la seguridad jurídica se apoya en la cláusula de Estado de Derecho (art. 1) en tanto permite que las autoridades judiciales adopten las decisiones con apoyo en reglas preexistentes y no con fundamento en su propia voluntad.

La seguridad jurídica en los términos expuestos se vincula con la igualdad de trato establecida por el artículo 13 de la Carta al prescribir que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades. En efecto, si las decisiones judiciales no fueran previsibles o las reglas y soluciones adoptadas en el pasado resultaran cambiantes e inestables, los ciudadanos no podrían esperar que el asunto que someten a la jurisdicción sea resuelto de la misma forma. Así las cosas, seguridad jurídica es una condición necesaria para garantizar el mandato de igualdad previsto en el artículo 13 de la Carta.

En atención a la importancia que tiene entonces preservar la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad en las actuaciones judiciales, el ordenamiento constitucional y la jurisprudencia de esta Corporación, han fijado varios instrumentos con ese propósito. En primer lugar, la Constitución reconoce que la actividad de los jueces está sometida al imperio de la “ley” lo que constituye no solo una garantía de autonomía e imparcialidad, sino también de igualdad en tanto el punto de partida y llegada de toda la actuación judicial es la aplicación de la “ley”. En segundo lugar y en estrecha relación con lo anterior, la ley –tal y como ocurre por ejemplo con la 153 de 1887- establece un conjunto de pautas orientadoras para resolver los diferentes problemas que se suscitan al interpretar y aplicar las normas jurídicas. En tercer lugar, la Constitución ha previsto órganos judiciales que tienen entre sus competencias la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico. En cuarto lugar, los pronunciamientos de esta Corporación han ido incorporando un grupo de doctrinas que, como ocurre con las relativas a la cosa juzgada y al deber de respeto del precedente judicial, tienen entre sus propósitos garantizar la estabilidad de las decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad. En quinto lugar, algunos estatutos como la Ley 1437 de 2011 incorporan normas que tienen por propósito asegurar la eficacia de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado a través, por ejemplo, de su extensión (arts. 10 y 102)."

Así mismo, Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se introdujo un nuevo norte político y social para Colombia dentro del cual se determinó que es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, empero garantizando la descentralización, la autonomía de sus entidades territoriales y la democracia participativa y pluralista; armonizada con el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación<sup>1</sup>, sentando las bases para la inclusión de todas las expresiones culturales del territorio.

En esta medida, el carácter diverso y plural no podía quedarse en un simple reconocimiento, por lo que el Constituyente también previó la garantía a los grupos étnicamente minoritarios de un espacio de representación política, en desarrollo del derecho a elegir y ser elegido (art. 40 C.P.) derivado del principio de democracia participativa.

La sentencia T-045 de 1993, que en esa ocasión se ocupó del derecho a la representación, precisó que los derechos políticos son fundamentales, así:

*"Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", **hacen parte de los***

---

<sup>1</sup> Artículo 7 Constitución Política

**derechos fundamentales de la persona humana.** Los derechos de participación en la dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo.”

Además, la adopción de tratados internacionales que consignan derechos políticos, se ha confirmado el carácter de fundamental de tales prerrogativas. Así se expuso en la **sentencia T-050 de 2002**:

*“Por lo expuesto es claro para la Sala que la esencia misma de nuestro sistema democrático se encuentra en el ejercicio libre de los derechos políticos consagrados en la Constitución, así como en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país ( artículo 21.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y cuya naturaleza de Derechos Fundamentales ha sido reconocida ampliamente en la jurisprudencia de esta Corte”.*

La Corte ha sostenido que los derechos políticos de participación son derechos fundamentales, y por tanto, pueden llegar a ser protegidos a través de la tutela, especialmente porque “los derechos de participación en la dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo<sup>2</sup>, es así como es claro que al ser un derecho constitucionalmente protegido, se vea vulnerado en el entendido de la falta de claridad de una providencia, en la cual está en juego no solo la candidatura de un Alcalde, en la cual no solo yo, sino mucho de los votantes en virtud de la confianza legítima, sufragaron para elegir Alcalde de Simacota, y aun así no se conceda la doble conformidad necesaria en estos casos.

Así, para dar aplicación a la consagración estatal enunciada previamente, estableció el derecho fundamental a elegir y ser elegido como una forma de efectivizar el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. De tal manera, el artículo 40 de la Constitución Política, dice:

**“(…) ARTICULO 40.** Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.
  2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
  3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
  4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
  5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
  6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
  7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
- Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. (…)

En este orden de ideas, en Sentencia T-232 de 2014 la Corte Constitucional sostuvo que el referido bien *ius fundamental* tiene una doble connotación que constituye su núcleo esencial de la siguiente manera:

*“(…) Partiendo del supuesto anterior, el derecho a elegir y ser elegido es, entonces, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al*

---

<sup>2</sup> Sentencia T-1337 de 2001 M.P Dr. Rodrigo Uprimny Yepes

*ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación es sinónimo de la libertad individual para “acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función<sup>34</sup>. En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pasiva, “consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado”<sup>35</sup>. (...)”.*

El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.

La Corte Constitución ha definido el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu<sup>36</sup>

El primer acercamiento de la Corte Constitucional en la aplicación de normas supranacionales al orden interno colombiano se da en las sentencias T-409 de 1992 M.P.: Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y C574-92 MP: Ciro Angarita Barón en donde se estableció que los convenios sobre derecho internacional humanitario tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional. A partir de la mencionada jurisprudencia, la Corte Constitucional comenzó a interpretar el inciso segundo del artículo 93 de la Carta como la norma que disponía la prevalencia de los tratados o convenios internacionales en el orden jurídico interno, siempre y cuando dichas normas hubiesen sido integradas en la normatividad colombiana a través de la ratificación del Estado, previo análisis de constitucionalidad.

Esta disposición consagra la preeminencia, superioridad o supremacía de los tratados y convenios internacionales en nuestro orden jurídico interno. Y es así como la norma exige que para que dicha prerrogativa tenga operancia es necesario que los citados acuerdos internacionales hayan sido «ratificados» por el Congreso, término jurídico que a juicio de la Corte es inapropiado, puesto que a quien le compete «ratificar» tales instrumentos internacionales es al Gobierno Nacional mas no al Congreso, ente éste al que se le atribuyó únicamente la facultad de «aprobar» los citados acuerdos, función que cumple por medio de ley.

El bloque de constitucionalidad está conformado por Preámbulo de la Carta Política, los artículos 1, 5, 39, 53, 56 y 93 de ese Estatuto Superior, pues en esas normas están consagrados los derechos que reclama el Sindicato actor como violados; también procede incluir la Constitución de la OIT y los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical (tratado y convenios debidamente ratificados por el Congreso, que versan sobre derechos que no pueden ser suspendidos ni aún bajo los estados de excepción); además, los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos<sup>7</sup>

La convención Americana de Derechos Humanos ratificado en Colombia por la Ley 16 de 1972, por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, establece lo siguiente en los mencionados artículos:

<sup>3</sup> Sentencia T-324 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.

<sup>4</sup> Sentencia T-510 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

<sup>5</sup> Sentencia C-955 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<sup>6</sup> Sentencia C-225/95

<sup>7</sup> Sentencia T.568-99 MP: Carlos Gaviria Díaz

*Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.*

*Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.*

*Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.*

Es así que del bloque de constitucionalidad se desprende el rango constitucional e internacional que tienen los derechos políticos, en este caso mi derecho a elegir que al no tener una segunda instancia o una instancia superior que revise la actuación del inferior y más aún cuando la doble conformidad tiene por objeto garantizar la corrección del fallo judicial, y en general, la existencia de una justicia acertada, recta y justa, en condiciones de igualdad; garantizando la corrección judicial.

La Doble impugnación, es un asunto de reciente pronunciamiento, la Corte en Sentencia SU217/2019: "Resulta especialmente relevante para el presente caso destacar la diferencia que la C-792 de 2014 hace entre la garantía de *impugnación de la sentencia condenatoria* (art. 29 C.P.) y la garantía de *doble instancia* (art. 31 C.P.). Al respecto sostiene que "[e]l derecho a la impugnación y la garantía de la doble instancia son estándares constitucionales autónomos y categorías conceptuales distintas e independientes, si bien en algunos supuestos fácticos específicos, el contenido de una y otra es coincidente". Sobre el particular se dijo en la citada providencia:

*"(...) estos imperativos difieren en distintos aspectos: (i) en cuanto a su fundamento normativo, mientras el derecho a la impugnación se encuentra consagrado en los artículos 29 del texto constitucional, 8.2. de la CADH y 14.5 del PIDCP, la garantía de la doble instancia se encuentra prevista en el artículo 31 de la Carta Política; (ii) en cuanto al status jurídico, mientras la impugnación es un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional en cabeza de las personas condenadas en un juicio penal, la doble instancia constituye una garantía que hace parte del debido proceso, y que puede ser alegada por cualquiera de los sujetos procesales; esta diferenciación tiene una repercusión importante, puesto que la Corte ha entendido que la doble instancia, por tener la condición de un principio general, puede ser exceptuado por vía legislativa; y como la impugnación no solo es un principio sino un derecho que hace parte integral del debido proceso, las excepciones al mismo se encuentran limitadas; (iii) en cuanto al ámbito de acción, mientras el derecho a la impugnación ha sido concebido para los juicios penales, la garantía de la doble instancia constituye la regla general de todo proceso judicial; (iv) en cuanto a su contenido, mientras el derecho a la impugnación otorga la facultad para controvertir la sentencia condenatoria, para que un mismo litigio sea resuelto en el mismo sentido por dos jueces distintos, la garantía de la doble instancia exige que una misma controversia jurídica sea sometida a dos instancias o fases procesales*

*distintas e independientes, y dirigidas por jueces distintos, pero sin importar que los fallos resultantes sean coincidentes; (v) en cuanto a su objeto, mientras el derecho a la impugnación recae sobre las sentencias condenatorias dictadas en el marco de un proceso penal, de modo que la facultad se estructura en torno al tipo y al contenido de la decisión judicial, la doble instancia se predica del proceso como tal, para que el juicio tenga dos instancias, independientemente del contenido y alcance de los fallos que resuelven la controversia; (vi) en cuanto a la finalidad, mientras el derecho a la impugnación atiende a la necesidad de garantizar la defensa plena de las personas que han sido condenadas en un proceso penal frente al acto incriminatorio, y a asegurar que mediante la doble conformidad judicial la condena sea impuesta correctamente, la doble instancia tiene por objeto garantizar la corrección del fallo judicial, y en general, “la existencia de una justicia acertada, recta y justa, en condiciones de igualdad”<sup>177</sup>; en el primer caso, el derecho se estructura en beneficio de un sujeto específico, mientras que el segundo persigue el objetivo impersonal de garantizar la corrección judicial.”*

Y más adelante, manifiesta:

*“Sin embargo, cuando no confluyen los tres elementos del supuesto fáctico reseñado, la coincidencia desaparece, así: (i) cuando se dicta un fallo por fuera de un juicio penal, en principio no rigen las exigencias propias del derecho a la impugnación, mientras que, por el contrario, sí son exigibles los requerimientos de la doble instancia; por ello, una vez agotada la primera instancia, la controversia debe ser sometida a una instancia adicional, bien sea de manera automática en virtud de dispositivos como la consulta, o bien sea mediante la interposición de recursos por alguno de los sujetos procesales; (ii) por su parte, cuando el fallo judicial se produce en una etapa procesal distinta a la primera instancia (por ejemplo, en la segunda instancia o en sede de casación), no tiene operancia el imperativo de la doble instancia, porque esta garantía se predica del proceso y no de la sentencia, y en esta hipótesis el imperativo ya ha sido satisfecho previamente; en contraste, si el fallo se enmarca en un juicio penal, y la decisión judicial es condenatoria, sí sería exigible el derecho a la impugnación, aunque la sentencia incriminatoria se dicte en una etapa distinta a la primera instancia; (iii) finalmente, si la providencia no tiene un contenido incriminatorio tampoco corrige el derecho a la impugnación, mientras que si el fallo se produce en la primera instancia, la garantía de la doble instancia sí sería exigible, independientemente del contenido incriminatorio de la decisión judicial.*

Si bien la génesis, de la doble instancia judicial, se suscita en el derecho penal, específicamente sobre el derecho fundamental y de primera generación, no menos cierto es que, como se demostró en líneas anteriores nos encontramos frente a un derecho civil y político de la misma prioridad, por tanto, merece sea revisado con cautela y un pronunciamiento que permita llenar el vacío jurídico que se advierte a la vista, es esta la oportunidad de este honorable y letrado despacho, proceder en el camino de la creación de precedentes que permita la salvaguarda de derechos fundamentales como el aquí incoado.

Es así como se debe tener en cuenta el artículo 10 del CPACA, que establece lo siguiente:

**Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia**

*Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas*

Por ello, en Sentencia C-539 de 2011, la Corte consideró que se había configurado una omisión legislativa relativa, por lo que se declaró la exequibilidad de enunciado “en el entendido” que las autoridades administrativas también “tendrán en cuenta” el precedente constitucional, por supuesto, sin perjuicio del carácter obligatorio *erga omnes* de las Sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad, ahora bien, desde los

tres niveles de análisis para este pronunciamiento, en el caso que nos atañe, lo que en dogmática se denominó el nivel tres, habla de la obligatoriedad de los precedentes fijados por la Corte Constitucional, con un parámetro de obligatoriedad, sobre los casos sometidos a su revisión. De lo anterior podemos inferir razonablemente, que dentro del caso que nos atañe y a la luz del bloque de constitucionalidad, las fuentes formales de derecho y la necesidad de aparar el derecho fundamental invocado, es menester el pronunciamiento con miras al esclarecimiento del vacío legal existente.

## **PROCEDENCIA Y LEGITIMIDAD**

Esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 5° y 9° del Decreto 2591 de 1991, ya que lo que se pretende es que se garantice el derecho fundamental al debido proceso y toda vez que la petición consiste en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo según el inciso 2° art. 86 de la C.P. siendo únicamente aceptables como otros medios de defensa judicial, para los fines de exclusión de la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho.

La existencia de otro medio de defensa ha sido reiteradamente explicado por la Honorable Corte Constitucional, en el sentido de que no siempre que se presenten varios mecanismos de defensa, la tutela resulta improcedente. Es necesario además una ponderación de eficacia de los mismos a partir de la cual se concluya que alguno de los otros medios existentes, es tan eficaz para la protección del derecho fundamental como la acción de tutela misma y en tal sentido en la sentencia T-526 del 18 de septiembre de 1992, Sala Primera de Revisión, manifestó:

"... Es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del constituyente."

Por otra parte, es deber del suscrito accionante indicar que si se ha agotado el mecanismo o medio de defensa, o en otras palabras, se presentaron de manera adecuada los medios de impugnación existentes sobre la solicitud del recuento de votos en las mesas donde se presume existen irregularidades, pero el resultado obtenido de dichas peticiones fue que las comisiones escrutadoras no accedieron a tal petición y su respuesta fue la negativa a efectuar el recuento indicado, lo que me ha conllevado a presentar esta acción constitucional.

Para los efectos de que trata el artículo 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo juramento que, con anterioridad a esta acción no he promovido acción similar por los mismos hechos.

## **PETICIONES**

**PRIMERO:** Se ampare el derecho Constitucional debido proceso, para que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, los cuales fueron conculcados dentro del escrutinio de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre de 2023, adelantado por las correspondientes comisiones escrutadoras en el aula múltiple del IEM Liceo Integrado de Zipaquirá.

**SEGUNDO:** Cómo consecuencia de lo anterior, se ordene a las comisiones escrutadoras zonales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del municipio de Zipaquirá o a quien haga sus veces, que se expida de nuevo el acto administrativo teniendo en cuenta y respetando los más de 3000 votos del pacto histórico en la comuna 4 del municipio de Zipaquirá y se me reconozca como Edil, al ser la lista mas votada y que se me nombre Edil y me sea nombrado por el alcalde del municipio en los términos que la ley establece para el caso en concreto.

## **ANEXOS Y PRUEBAS**

Me permito aportar como anexos y pruebas, las siguientes:

- Anexo 1: Cedula de Ciudadanía
- Autos y documentos que acreditan la información incorporada

### **JURAMENTO**

Declaro bajo la gravedad de juramento que no he presentado Acción Constitucional alguna por los mismos hechos y derechos detallados en esta Acción de Tutela y que la anterior mencionada no se le dio tramite y nunca se dio respuesta y que tiene factores facticos y jurídicos adicionales y diferentes me permito radicar la presente.

### **NOTIFICACIONES**

El suscrito recibirá notificaciones en la Carrera 22 # 3-21, Apto 602, en el barrio Julio Caro del municipio de Zipaquirá, celular 3182932882, o en el correo electrónico [fabihumcg@gmail.com](mailto:fabihumcg@gmail.com) y [camanhermu@gmail.com](mailto:camanhermu@gmail.com) .

Respetuosamente,



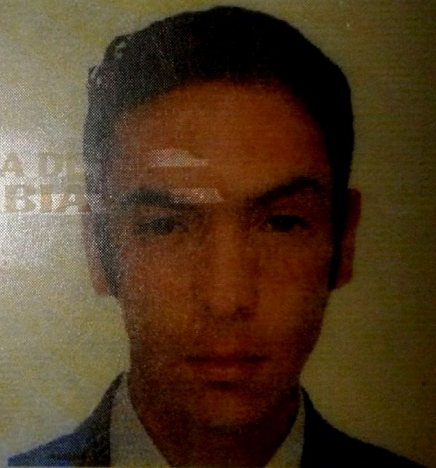
**Camilo Andrés Hernández Muñoz.**  
**C.C. No. 1075652905 Exp. Zipaquirá.**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **1.075.652.905**

**HERNANDEZ MUÑOZ**  
APELLIDOS

**CAMILO ANDRES**  
NOMBRES



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilo Andres Hernandez', written over a horizontal line.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

**17-DIC-1986**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**

**A+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**14-ENE-2005 ZIPAQUIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1534000-39135453-M-1075652905-20050318

**03358** 05077P 02 158116265

Ref.: REMITE POR COMPETENCIA.

INFORME SECRETARIAL: Zipaquirá – Cundinamarca, quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Al Despacho del Juez Coordinador, tutela remitida a esta oficina judicial, el día de hoy, siendo accionante el señor CAMILO ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ quien instaura acción de tutela en contra de la COMISION ESCRUTADORA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, Y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL tras considerar que le están vulnerando su derecho fundamental al Debido Proceso, Acceso a la Justicia y seguridad jurídica, a Elegir y ser elegido Sírvasse proveer.



JUAN MANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ  
Profesional Universitario G14  
Secretario Centro de Servicios Judiciales de Zipaquirá

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL  
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES  
DE ZIPAQUIRÁ -CUNDINAMARCA COORDINACIÓN

Zipaquirá – Cundinamarca, quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

En atención al anterior informe secretarial y acorde a lo establecido en el Decreto 333 del 2021, el cual modifica los artículos 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en el artículo 1ro numeral 3ro, establece: ***“Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la República, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral...serán repartidas a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos”.***

En virtud de que la afectación de los derechos fundamentales se predica, de la COMISION ESCRUTADORA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, Y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL la competencia para conocer de la presente acción de tutela se encuentra radicada en las Corporaciones mencionadas. En consecuencia, se dispone a remitir las diligencias al **reparto del H. Tribunal Contencioso Administrativo de Distrito Judicial de Cundinamarca**, para los fines consiguientes. Entérese de esta determinación al accionante.

**CÚMPLASE**

**LUIS FELIPE MACHADO RAMIREZ**  
Juez Coordinador  
**Firmado digitalmente**

Carrera 17 No. 4A-25 Piso 1 Barrio Algarra III Celular 315-2592911 Correo electrónico:  
censerjudzip@cendoj.ramajudicial.gov.co

**Firmado Por:**  
**Luis Felipe Machado Ramirez**  
**Juez**  
**Juzgado Municipal**  
**Penal 004 Control De Garantías**  
**Zipaquira - Cundinamarca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d4be98069d698d34633d1baf32ef91cbec7577a91d20146105fca500a74c79bf**

Documento generado en 15/11/2023 04:15:24 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
2023-11-17	ENVIO JUZGADO ADMINISTRATIVO POR COMPETENCIA	SE REMITE A Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Zipaquirá - Reparto POR COMPETENCIA			2023-11-17
2023-11-17	NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO	PARTES			2023-11-17
2023-11-17	AUTO QUE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA	PRIMERO: DECLÁRASE que este Despacho no es competente para asumir el conocimiento del presente asunto en primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Por la Secretaría de esta Subsección, remítase inmediatamente el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Zipaquirá - Reparto, para lo de su cargo. Dispóngase lo pertinente.			2023-11-17
2023-11-17	AL DESPACHO POR REPARTO CONSTITUCIONALES	ADL			2023-11-17
2023-11-17	Reparto y Radicación	REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL viernes, 17 de noviembre de 2023 con secuencia: 12354	2023-11-17	2023-11-17	2023-11-17



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia



ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Fecha : 17/nov./2023

Página

1

NUMERO DE RADICACIÓN

110013335025202300405 00

CORPORACION JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE BO REPARTIDO AL DESPACHO  
GRUP CD. DESP 075  
ACCIONES DE TUTELA SECUENCIA: 12354  
FECHA DE REPARTO 17/11/2023 12:49:52p. m.

JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO SEC SEGUNDA ORAL BOGOTA

IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDO	PARTE	
1075652905	CAMILO ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ		01	
SD78587583949	EN NOMBRE PROPIO		03	

OBSERVACIONES: ACCIONES DE TUTELA RECIBIDA POR CORREO EL 17/11/2023  
REMITE TAC SECCION SEGUNDA SUBSECCION D EXP 2023-01064

DESKTOP-DEG1EA9

CUADERNOS: 1 0  
FOLIOS: EXPEDIENTE DIGITAL

3 0 9 5 2  
אזהרה: המידע הנ"ל הוא סודי ומוגן על ידי חוקי הגנת המידע.

EMPLEADO  
lbeltranv

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA**  
**SECCIÓN SEGUNDA**  
**SUBSECCIÓN “D”**

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

**Acción de Tutela 2023-01064**

Se encuentra al Despacho la acción de tutela interpuesta por Camilo Andrés Hernández Muñoz, contra la Comisión Escrutadora Municipal de Zipaquirá, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, a elegir y ser elegido.

Se advierte que el Juez Coordinador de los Juzgados Penales Municipales de Zipaquirá - Cundinamarca, en atención a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 1º del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, profirió el auto de fecha 15 de noviembre de 2023, en el que resolvió:

“En virtud de que la afectación de los derechos fundamentales se predica, de la COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, Y LA REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL la competencia para conocer de la presente acción de tutela se encuentra radicada en las Corporaciones mencionadas. En consecuencia, se dispone a remitir las diligencias al **reparto del H. Tribunal Contencioso Administrativo de Distrito Judicial de Cundinamarca.(...)**”.

El auto parcialmente transcrito fue remitido por la Secretaría General de este Tribunal al correo electrónico de la Secretaría de la Subsección “D”, de la Sección Segunda de esta Corporación, el día 15 de noviembre de 2023, a las 16:23 a.m., quien lo remitió a este despacho el 16 de noviembre a las 11:25 a.m., de la misma fecha.

Así las cosas, frente al reparto de las acciones de tutela, el Decreto 333 del 6 de abril de 2021<sup>1</sup>, en su artículo 1º establece:

**“Artículo 1º. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015.**  
*Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:*

**“Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela.** Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

---

<sup>1</sup> "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela",

---

*3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Republica, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral, así como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitación o autorización de funcionamiento, con fundamento en los artículos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, serán repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. (...)*

**11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente artículo. (...)**

Se observa que la presente acción de tutela está dirigida contra la Comisión Escrutadora Municipal de Zipaquirá, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por presuntas irregularidades en el escrutinio municipal de Zipaquirá Cundinamarca de las elecciones territoriales adelantadas el pasado 29 de octubre de 2023 y que terminó el día 4 de noviembre de 2023 con la publicación del formulario E24 en el que se publicó la votación total de la coalición "Pacto Histórico Colombia Puede" y el formulario E26 por medio del cual se hace pública la declaratoria de elección, ambos documentos suscritos por la Comisión Escrutadora Municipal de Zipaquirá, conformada por Luis Ángel Martínez y Ricardo José Cadavid, en calidad de miembros, y Luis Guillermo Acuña, en calidad de secretario, y en los que se indica que la votación de la coalición "Pacto Histórico Colombia Puede" es de 0 votos, cuando en realidad, presuntamente 3366 personas ejercieron su derecho al voto por esa coalición y aun así no aparecen sus votos.

Sobre este particular, el Despacho considera oportuno precisar que de los hechos narrados por el accionante, no se advierte una actuación propia del Registrador Nacional del Estado Civil o del Consejo Nacional Electoral, sino únicamente se refiere a algunas decisiones de la Comisión Escrutadora Municipal de Zipaquirá, que a lo mejor podrían tocar con el Registrador Municipal de este municipio.

Dicho lo anterior, es preciso indicar que en el caso de estudio no se configura la causal de reparto para conocimiento de la acción de tutela, descrita en el numeral 3 artículo 1° del **Decreto 333 del 6 de abril de 2021**, que fue invocada por el Juez Coordinador de los Juzgados Penales Municipales de Zipaquirá - Cundinamarca, porque aunque en el escrito de tutela el accionante indica que la acción constitucional de tutela va dirigida contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, dentro de la tutela no se advierte actuaciones por parte de las anteriores autoridades. Sin embargo y comoquiera que la presente acción de tutela también fue invocada contra dichas entidades, se debe aplicar la regla dispuesta en el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

Bien que la causal del numeral 3 artículo 1° del **Decreto 333 del 6 de abril de 2021**, disponga que "las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Republica, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral (...), serán repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos". Sin embargo, en la petición de tutela referenciada no da cuenta ni se reprocha ninguna actuación de estas autoridades, motivo por el cual se concluye que en el presente caso, se debe aplicar la regla de reparto establecida en el numeral 2° del artículo 1 del Decreto

333 de 2021, porque la acción de tutela se dirigió contra las señaladas autoridades del orden nacional.

Así las cosas, se ordenará **remitir** las presentes diligencias, **a los Jueces del Circuito de Bogotá (Reparto)**, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 333 de 2021. En mérito de lo expuesto, se

**RESUELVE:**

**Primero: Se declara** que esta Corporación, por el numeral 2 del artículo 1° del Decreto 333 de 2021, no está llamada a conocer en primera instancia de la presente acción de tutela.

**Segundo: Envíense inmediatamente** estas diligencias a los **Jueces del Circuito de Bogotá (Reparto)**, para lo de su competencia.

**Tercero:** Por Secretaría, **notifíquese** inmediatamente al actor por el medio más expedito y eficaz, **y dése cumplimiento** a lo dispuesto en el numeral anterior, previas las anotaciones a que haya lugar.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cerveleón Padilla Linares', is enclosed within a large, loopy oval-shaped scribble.

**CERVELEÓN PADILLA LINARES**  
**Magistrado**